



EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AMAZONAS

Julio Carrizosa Umaña¹

Durante los últimos treinta años, en los departamentos surorientales, especialmente en Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, se han aplicado tres políticas estatales fundamentales, en las cuales han coincidido, en términos generales, todos los gobiernos: una indigenista, una ambiental y una de educación e investigación. Cada conjunto político se generó mediante procesos diferentes y ha sido afectado tanto por las características estructurales de cada territorio, sobre todo por su relación con las fronteras agropecuarias, como por el narcotráfico y la insurrección. En este artículo se señalan esas diferencias y se proponen algunos interrogantes como temas de investigación.

El conjunto de políticas que aquí llamamos indigenista tiene antecedentes en las medidas con que el Consejo de Indias trató de defender a los indígenas precolombinos y en las posiciones antiliberalistas y defensoras de la propiedad comunal indígena de Miguel Antonio Caro, pero su versión moderna se construyó a partir del encuentro del pensamiento antropológico internacional con la realidad de los grupos indígenas colombianos en el Instituto Colombiano de Antropología y en algunas universidades colombianas. Estas nuevas ideas influyeron en varios gobiernos de mediados del siglo XX y tuvieron su mejor desarrollo durante el gobierno de Virgilio Barco, con la declara-

ción de varias de cientos de miles de hectáreas de la cuenca amazónica colombiana como resguardos indígenas. Esta política ha sido apoyada por todos los gobiernos con diferentes intensidades desde el antiguo Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior y de Justicia.

Las políticas que hoy llamamos ambientalistas se iniciaron en gran escala con la declaración de la Reserva Forestal de la Amazonia en 1959 y luego avanzaron durante los gobiernos de Misael Pastrana y Alfonso López Michelsen, con el establecimiento de vedas a la cacería comercial de animales silvestres, la firma del Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y la declaración del Parque Amacayacú en el Trapecio Amazónico. Posteriormente, durante el gobierno Barco, se declararon otros tres grandes parques, Cahuinarí, Río Pure y la Paya, para un total de más de dos millones de hectáreas en la planicie amazónica perteneciente a nuestro país.

Durante el gobierno de Cesar Gaviria, la ley 91 creó el Ministerio del Ambiente, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, como partes del Sistema Nacional Ambiental. Ambas políticas, la indigenista y la ambiental, contienen elementos de educación y de investigación que han sido reforzados durante todos estos años

¹ Ingeniero civil, MSC en Economía, MSC en Administración Pública.

con las medidas tomadas por todas las administraciones para lentamente aumentar y mejorar el sistema de educación pública e incrementar, mediante Colciencias, los fondos destinados a investigar la Amazonia. El antiguo Dainco en Araracuara, la Universidad Nacional de Colombia y varias otras universidades públicas y privadas mantuvieron y mantienen actividades educativas e investigativas constantes o eventuales en la cuenca desde mediados del siglo XX, destacándose la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia. El estado ha procurado durante los últimos treinta años apoyar estas tres políticas fundamentales dando seguridad, manteniendo una mínima actividad administrativa en los cascos urbanos y proporcionando allí algunos servicios públicos. En un país afectado por tantos problemas socioeconómicos, sobresale la continuidad de estas políticas, producto, me atrevo a afirmar, de modelos mentales de académicos, políticos y funcionarios que percibieron y perciben la complejidad de la cuenca no como un espacio que debe ser transformado, sino como uno que debe ser investigado, protegido y conservado.

Esto modos de ver la realidad, a pesar de sus antiguas raíces, no siempre han tenido la fuerza que tuvieron durante estos treinta años. Los españoles se asomaron a la Amazonia únicamente porque sospecharon que allí estaba localizado el fabuloso Eldorado o para establecer misiones evangelizadoras de las tribus. Durante los primeros años de la República, los procesos principales estaban orientados por el pensamiento utilitarista: los intentos del General Reyes de encontrar cantidades suficientes de corteza de quina y su proyectada inmigración masiva de trabajadores asiáticos para establecer plantaciones y la colaboración pasiva de colonos colombianas con la famosa Casa Arana en la cual, por omisión de nuestras autoridades, Colombia resultó en parte responsable del genocidio y casi extinción de los Witoto.

La aplicación de estas políticas ha tenido suertes diversas, atadas a los procesos principales que ha seguido nuestro país y a las estructuras ecológicas y socioeconómicas de cada subregión. La insurrección y el narcotráfico han afectado la suerte de todas las actividades en la cuenca, es-

pecialmente en las subregiones más cercanas a la cordillera. Durante los últimos años, estos impactos se han movido hacia el suroriente, afectando ecosistemas antes poco modificados. En cada departamento amazónico, estos conjuntos de procesos han tenido características diferentes: en el Putumayo, los cultivos de uso ilícito han sido numerosos y la guerra entre paramilitares y guerrilla ha sido intensa y muy cruenta; en el Vaupés, este tipo de enfrentamientos han tenido menos importancia, pero la guerrilla tuvo en años pasados fuerza suficiente para tomarse su capital.

En el Caquetá, desde mediados del siglo XX, los gobiernos han apoyado políticas diferentes de las planteadas por indigenistas y ambientalistas, la colonización dirigida en este departamento se planteó como alternativa a la Reforma Agraria, como una especie de válvula que dejara escapar el vapor generado por los conflictos sociales en el resto del país. El Banco Mundial apoyó estas políticas y el Incora diseñó un estilo de asentamiento en el cual el Estado definía el tamaño óptimo de la explotación, adjudicaba baldíos, construía carreteras, suministraba energía y agua, establecía escuelas y hospitales y proporcionaba asistencia técnica.

Poco de esto permanece, casi nadie recuerda este gigantesco esfuerzo, quedan únicamente los re-





cuerdos cercanos de la llamada Zona de Distensión, donde la guerrilla se asentó durante varios años y convivió con las actividades de colonización—deforestación e inclusive con el montaje de haciendas ganaderas que hoy, apoyadas nuevamente por el Estado, conforman una amplia brecha en la antigua selva.

En el Amazonas, al contrario, la selva continúa casi intacta, afectada únicamente por el corte selectivo de los árboles más valiosos, por la cacería furtiva de los animales más demandados y por actividades puntuales de extracción de oro, pero en este departamento las actividades de insurrectos y narcotraficantes también han afectado en ocasiones la marcha de las instituciones. Durante estos treinta años, la población se ha cuadruplicado, pero apenas ha llegado a un poco más de la mitad de lo que proyectaba el Dane, según el Censo de 1985. Algunos índices de bienestar han mejorado, especialmente los educativos (93,7 %), de alfabetismo (92,2%), de escolarización entre los seis y los diez años. Otros aspectos, como “necesidades básicas insatisfechas” se ha hecho aceptable en Leticia, pero disminuye si se consideran los poblados indígenas, cuyas características no coinciden con los parámetros establecidos.

Recordemos que el departamento tiene un área mayor que la de muchos países independientes, 121.240

kms², doce millones de hectáreas y que la población que encontró el Dane en el Censo de 2005 fue de 46.950 habitantes en 9400 viviendas, más de la mitad que en las cabeceras urbanas. La densidad es una de las más bajas de América Latina y la biodiversidad una de las más altas, más del noventa por ciento del territorio está bajo cobertura de bosque tropical húmedo. Aquí, la aplicación de las políticas indigenistas, ambientalistas y de educación—investigación han tenido éxitos significativos, un poco ocultos por la retórica desarrollista que continúa pidiendo que crezca el PNB del departamento. Los viajeros y turistas desprevenidos se admiran de los parques, los institutos de investigación, los resguardos y la calidad de vida de Leticia o de Puerto Nariño, pero algunos colombianos todavía reclaman que estas políticas se reemplacen por unas de mayores aspiraciones económicas.

Recordemos que esas políticas que condujeron a la conversión de la selva en potreros en el Caquetá y el Putumayo se iniciaron cuando el conflicto armado con el Perú exigió que se construyeran las carreteras hacia Florencia y Mocoa, de igual manera, estuvieron naturalmente guiadas por el afán de lucro y fueron un poco más tarde oficializadas por los gobiernos de mediados del siglo XX e impulsadas como alternativa a la Reforma Agraria en el mismo Incora, apoyado por grandes créditos del Banco Mundial. Hoy, estas políticas utilitaristas se plantean nuevamente, ahora bajo el paraguas del crecimiento económico. Discusiones que se creían superadas se reviven, se propone plantar grandes extensiones de una sola especie, se recomiendan como nuevas antiguas técnicas ganaderas, los propietarios llevados por la inercia y por los bajos rendimientos de sus haciendas continúan quemando y deforestando. Los antiguos modelos mentales resurgen en las cabezas de los nietos que aspiran a tener bajo su control decenas o cientos de miles de hectáreas.

Pienso, antes de cambiar las políticas indigenistas, ambientalistas y de educación—investigación, como lo están proponiendo algunos, que este es el momento de efectuar un análisis profundo de las experiencias de los últimos treinta años y propongo que este análisis sea tanto económico como ecológico y que se aleje de la retórica de ambos modelos mentales, que sea cuantitativo y específico.